

# *Nuevo mapa político; misma Justicia abandonada*

**IGNACIO LÓPEZ CHOCARRO**

Si los profesionales del derecho no teníamos aun suficientemente claro que las graves carencias que afectan a la Justicia no interesan realmente a ningún partido político, bastaron dos debates para confirmarlo.

Hace una semana en tres horas de debate electoral no hubo ni una sola mención a la necesidad de actualizar el funcionamiento de nuestros órganos judiciales, que evite la eternización de gran parte de los procesos judiciales.

Parecía que la reciente huelga de Jueces y Fiscales reclamando superar la estructura organizativa del siglo XIX habría sido suficiente ocupar al menos un par de

minutos de televisión, aunque fuese entre reproches y acusaciones de mentiras.

Pero ni un minuto. Mucho me temo que la excelente radiografía de la Justicia que recoge el Libro Blanco publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 1997 seguirá vigente sin que, al cabo de más de 20 años, hayamos sido capaces de dar respuesta a las necesidades de una sociedad del siglo XXI.

Es cierto que los programas políticos, además de la consabida necesidad de reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ, hacen alguna mención inconcreta a la necesidad de dotar a nuestra Justicia de mayores medios materiales y

humanos. Pero si esos programas fueran un contrato, y en cierto modo lo son, serían miles las demandas que por manifiesto incumplimiento les podrían llover a sus autores.

¿Tan difícil es alcanzar un Pacto de Estado para concebir a la Justicia no sólo como un poder sino como un Servicio Público y de calidad?

Sobrecarga inhumana de trabajo e instalaciones indignas son la consecuencia inevitable de una inversión a todas luces insuficiente.

Habrà quien crea que el mal funcionamiento de los Juzgados no les afecta, ya que tal vez nunca acudirán a ellos. ¡Craso error!

El retraso de nuestros tribunales genera una inseguridad jurídica que tiene importantísimas repercusiones en nuestra economía, provocando el descenso de las inversiones, el encarecimiento de los cré-

ditos y la renuncia a crear nuevas empresas.

Un estudio pionero en Europa presentado hace poco en la Cambra de Comerç de Barcelona revela que de más de 6.000.000.000 euros reclamados en Cataluña en 2013, apenas se habían recuperado un 21,8% tres años después.

Ese dato, y sus enormes repercusiones en el aumento del PIB y la creación de nuevos puestos de trabajo, ¿no es motivo suficiente para llamar la atención de nuestros políticos?

Habremos de darle algún margen al nuevo Gobierno pero no podemos esperar más. Aparquen las ideologías pues estamos ante una cuestión de Estado.

**Ignacio López Chocarro** es decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Barcelona.

## **La Justicia, como Servicio Público, requiere de un Pacto de Estado**